

OLMOS: LA INCLUSIÓN AL REVÉS

Virgilio Acuña Peralta
Congresista de la República

Cuando el presidente Ollante Humala inició su mandato anunciando que la prioridad de su gobierno sería la inclusión social, todo el país aplaudió. Por primera vez, desde el Estado se reconocía la necesidad de una intervención equilibradora de las desigualdades económicas y sociales sin caer en el populismo, esto es los subsidios y el proteccionismo estatal.

Lamentablemente, a cinco meses de su mandato da la impresión de que algunos de los más altos funcionarios de su régimen, heredados de administraciones anteriores e incluso algunos de sus ministros, o no han entendido ese mensaje o están recibiendo a espaldas del conocimiento público directivas en otro sentido. El caso del proyecto de irrigación de Olmos, en la región Lambayeque, es la muestra más evidente de tal distorsión.

La idea de irrigar Olmos surgió en 1929 cuando en el Congreso de Irrigaciones del Norte el ingeniero Charles W. Sutton propusiera la visionaria idea de desviar aguas del torrentoso Huancabamba hacia las pampas eriazas de esa zona. El proyecto original consistía en habilitar nuevas tierras y distribuirlas en lotes de mediana y pequeña extensión, toda una reforma agraria para la época. El proyecto erizó a los grandes propietarios que la combatieron sin tregua. Por ello estuvo encarpetaado por 30 años, hasta que en la década de 1960 el ilustre lambayecano Andres Townsend Escurra volvió a ponerlo en lo palestra, sin que tampoco se hiciera mucho. En la década de 1980 el ascenso popular y regional lo tomó como bandera y casi no hubo vehículo en la región que no llevara la calcomanía «Olmos: anhelo lambayecano».

Recién el siglo XXI, el ese anhelo histórico empezó a hacerse realidad, ya no como obra estatal sino, acorde a los tiempos, como asociación público-privada. El proyecto contemplaba la construcción de un túnel trasandino, una represa y una hidroeléctrica y habilitación de nuevas tierras. El Estado concesionó la ejecución de estas obras a la empresa Odebrecht con la contraparte de financiar la inversión con la venta de las tierras a ganar. Hasta ahí todo marchaba más o menos bien.

Los problemas empezaron a surgir porque el Estado, desde un inicio, consideró que los miembros de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos –propietaria ancestral de las tierras- no calificaban como beneficiarios y, por ello, les expropió 111 mil hectáreas sin reconocerles ninguna compensación. Es decir fue el primer grupo en ser no incluido sino excluido del proyecto. Este hecho motivó la formación de una Asociación de Defensa del Patrimonio de Olmos.

Luego les tocaría el turno a los pequeños y medianos agricultores lambayecanos que deberían ser los principales beneficiados pero que también fueron excluidos, al definirse un modelo de venta en lotes muy grandes que les hacía imposible siquiera postular. Finalmente, el proyecto tampoco beneficiará a los comuneros asentados en el valle viejo de Olmos porque ahí el proyecto solo va a hacer llegar canales cobrando un alto precio por el uso del agua, pero sin ofrecer riego tecnificado ni las facilidades para poder utilizar el agua. Son el tercer grupo excluido.

La oposición de comuneros y pequeños agricultores, así como de una serie de organizaciones regionales, casi al final del proceso de venta logró que el modelo de lotización se modificara ofertando 30 lotes de mil hectáreas; 10 de 500; 1 de 300; 1 de 270; 8 de 250 y 1 de 230. Aún así, un 92% de las tierras de Olmos estaban orientadas solo a grandes grupos económicos.

El pasado 9 de diciembre se realizó la subasta de tierras y de las 38 mil hectáreas ofrecidas solo se pudo colocar la mitad: nueve empresas se adjudicaron 19 mil hectáreas del proyecto. Las dos principales compradoras fueron el Grupo Gloria (15.600 hectáreas) y Agro American Michiquillay (1.070 hectáreas). Aquí la tortilla se volteó porque empezó la inclusión.

En efecto, el costo total del proyecto hasta el momento es de 220 millones de dólares faltando invertir otro tanto. Es decir, en total 440 millones de dólares. Eso hace que cada una de las 38 mil hectáreas acabe costando, en promedio, 11.500 dólares. Pero, oh sorpresa, la concesionaria ha vendido cada hectárea en solo 4.500 dólares. Es decir, está subsidiando a estas grandes empresas con 7 mil dólares por hectárea: un subsidio total de 133 millones de dólares. Y eso sin contar el costo social de 90 años de lucha de la región por tener su irrigación.

Los promotores del proyecto pretenden justificar este subsidio sosteniendo que se beneficiará a la población local porque se crearán miles de puestos de trabajo, principalmente como jornaleros o prestando servicios menores. Pero 90 años no pasan en vano, toda la región es conciente que la concepción inicial de la irrigación de Olmos era promover la pequeña y mediana agricultura lambayecana, es decir ser incluidos. Hoy estos grandes grupos sociales están fuera del proyecto. Los únicos subsidiados son el grupo Gloria y los otros compradores. ¡Viva la inclusión social!

Virgilio Acuña Peralta
Congresista de la República